



## Sitúa encuesta a Panamá como el quinto mas corrupto entre 26 países latinoamericanos

 Editado por Nuria Barbosa | 

Ciudad de Panamá, 18 jul (RHC) Panamá es el quinto país más corrupto entre 26 latinoamericanos, de acuerdo con una consulta de El Barómetro de las Américas, que publica sus resultados.

De acuerdo con la muestra, a Panamá le superan sólo Colombia, Trinidad y Tobago, Argentina y Guyana, mientras Surinam, Canadá y Uruguay se mencionan como las naciones donde sus ciudadanos tienen los más bajos niveles de percepción de corrupción.

El estudio ubica al presidente Ricardo Martinelli, partidos políticos y Asamblea Nacional como los entes públicos con los más bajos niveles de confianza.

La encuestadora es patrocinada por el programa Democracia y Gobierno de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y coordinada por la Universidad de Vanderbilt, del estado norteamericano de Tenesí

La Contraloría de la República de Panamá sigue cuestionada por presunta corrupción en la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional de Aseo mientras exigen que su jefa Gioconda Torres comparezca ante diputados.

Representantes de una veintena de organizaciones de la sociedad civil críticas de la labor de Torres barren de manera simbólica la entrada de la sede de la Contraloría para pedir limpieza en el trabajo fiscalizador de la entidad.

El pueblo está decepcionado de su labor como funcionaria pública y ella tiene que fiscalizar y sancionar lo mal hecho, señaló durante la protesta Orestes del Río, secretario de la Juventud del Partido Popular.

A Torres le cuestionan los refrendos que ha realizado en los últimos meses a favor de contrataciones directas por 450 mil dólares a la Defensoría del Pueblo y por varios millones de la autoridad de aseso en el alquiler de equipos de recogida de basura.

En el caso de la Defensoría uno fue a favor de Imaginarium Studio, S. A. por 249 mil 845 dólares, un contrato de consultoría para brindar asesoría profesional en diseño gráfico, y el otro contrato de consultoría favoreció a En Avant S. A. por 199 mil 983 para mejorar el servicio de atención al cliente.

Para el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, sin importar quién haya firmado los cuestionados contratos, la responsable jerárquica es la contralora general de la República.

Mientras una demanda por venta ilegal de tierras de la comarca Ng ñbe Buglé presentada por la cacica general, Silvia Carrera, fue admitida por el Ministerio Público (MP).

La querrela fue presentada el 10 de este mes por la cacica Carrera contra funcionarios, residentes en Kusapín e inversionistas por supuestas irregularidades en la venta de tierras de la comarca de esa etnia indígena.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el despacho superior de la Procuraduría, que revisa el caso, pidió información a la Fiscalía Segunda de Circuito de Bocas del Toro sobre el expediente que instruye por el mismo hecho.

La líder Carrera acusó a 17 personas, entre residentes de la comarca, abogados, inversionistas y funcionarios, por delitos contra el patrimonio económico, la fe pública y la administración de justicia.

La Fiscalía bocatoreña adelanta un proceso por la venta de dos fincas en Kusapín, que supuestamente fueron transadas de manera irregular.

El caso coincide con el anuncio de que un relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, visitará Panamá mañana para estudiar también la parte de ese proceso.

La fiscal Jessica Rosas hizo la semana pasada una inspección en la Alcaldía de Kusapín, que pondrá a disposición del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Anaya espera que su visita contribuya a dar visibilidad a las preocupaciones de los pueblos indígenas en Panamá, incluidos los ng ñbes y buglés, gunas, emberás, wounaan, bri bri y nasos, preocupaciones que, a menudo, son ignoradas por las sociedades en las que viven, según dijo.

Like 0

Twitter 0